

## **EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS DEUDAS CON LOS CAMPESINOS GUAJIROS: UN CONFLICTO ESTRUCTURAL**

La Guajira, una de las regiones más marginadas de Colombia, ha sido escenario de un conflicto histórico relacionado con las deudas que el Estado tiene con los campesinos de esta zona. Esta situación ha generado una serie de dificultades económicas y sociales que afectan de manera directa a la población rural, quienes, además de enfrentar condiciones de vida precarias, luchan por obtener justicia ante las promesas incumplidas de apoyo por parte del gobierno nacional

La Guajira, ubicada al norte del país, es una región caracterizada por su pobreza y por ser una de las más afectadas por la falta de acceso a servicios básicos. A pesar de su importancia estratégica, pues alberga importantes recursos naturales, como el carbón, y es un punto clave

para el comercio en el Caribe colombiano, las comunidades rurales de la región, en su mayoría campesinas, siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Los campesinos guajiros, sobre todo aquellos que habitan en zonas alejadas, han dependido históricamente de los subsidios y programas del gobierno para poder subsistir. Sin embargo, estos apoyos son insuficientes o simplemente inexistentes. Las deudas con los campesinos de la región se refieren a los compromisos de las autoridades nacionales y locales de garantizar condiciones mínimas de bienestar, de proveerles acceso a tierras productivas, recursos y servicios, y de pagar compensaciones por daños ocasionados en sus territorios.



Las deudas con los campesinos de La Guajira no son solo financieras, sino también sociales y políticas. A lo largo de los años, los gobiernos han hecho promesas de inversiones en infraestructura, y asistencia técnica para los campesinos, pero la mayoría de estos compromisos se han quedado en el papel. La falta de un compromiso real por parte de las autoridades ha generado una situación de abandono total, especialmente en las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

El atraso en el cumplimiento de los pagos y en la implementación de proyectos ha afectado gravemente la productividad agrícola de la región. En muchos casos, los campesinos han sido despojados de sus tierras o no han recibido el apoyo prometido para mejorar sus cultivos. La falta de recursos para comprar semillas, herramientas y equipos adecuados ha hecho que sus actividades económicas sean cada vez más precarias.

Para las familias campesinas guajiras, la deuda no es solo una cuestión económica. La ausencia de un respaldo gubernamental ha repercutido en la calidad de vida de estas familias, que sufren las consecuencias de la pobreza extrema y la desigualdad. La escasez de alimentos, la falta de acceso a la educación de calidad y la escasa atención en salud son algunos de los efectos más visibles de la deuda social que el gobierno ha mantenido con estas comunidades.

Uno de los aspectos más preocupantes es la pobreza infantil en la región, la cual afecta gravemente el desarrollo de las nuevas generaciones. La falta de acceso a una educación adecuada y la escasez de servicios básicos han condenado a los niños y jóvenes guajiros a un ciclo de pobreza del cual es difícil escapar. Además, el éxodo de jóvenes hacia otras ciudades en busca de oportunidades, dejando atrás a las familias rurales, contribuye al debilitamiento de las comunidades campesinas.

El gobierno colombiano ha mostrado ciertas intenciones de mejorar la situación de los campesinos en La Guajira, pero estas acciones no han sido suficientes ni han logrado transformar la realidad de la región. A pesar de los esfuerzos por promover proyectos de desarrollo económico y social, la falta de continuidad, de recursos y de voluntad política ha dificultado los avances en la implementación de soluciones a largo plazo.

Las promesas de pagos a campesinos por parte de entidades como el Ministerio de Agricultura, y en ocasiones el gobierno departamental, a menudo se quedan en meras intenciones sin ejecución efectiva. Los campesinos guajiros han recurrido a la movilización social, protestas y bloqueos para exigir que se reconozcan sus derechos y se cumpla con las obligaciones adquiridas por el gobierno

La solución a la deuda histórica con los campesinos guajiros requiere un enfoque integral que no solo atienda las necesidades inmediatas, sino que también contemple el desarrollo sostenible a largo plazo. Es fundamental que tanto el gobierno local como el nacional establezcan políticas públicas coherentes que favorezcan la seguridad alimentaria, el acceso a la educación, la infraestructura rural y el fortalecimiento de la productividad agrícola.

En este sentido, es necesario invertir en proyectos de educación y capacitación que permitan a los campesinos mejorar sus técnicas agrícolas

y diversificar sus fuentes de ingreso. Además, es esencial el fortalecimiento de la infraestructura rural para garantizar el acceso a mercados y la comercialización de productos. De igual forma, debe haber una atención especial a los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región.

La deuda con los campesinos guajiros es un reflejo de un problema estructural que ha estado presente durante décadas. La falta de cumplimiento de las promesas de los gobiernos y la ausencia de una política pública coherente para garantizar el bienestar de los campesinos en esta región han mantenido a las comunidades rurales en condiciones de vulnerabilidad. La situación exige un compromiso serio por parte del gobierno colombiano para dar soluciones definitivas a los campesinos guajiros, y solo a través de la implementación de políticas públicas adecuadas, la inversión en infraestructura y la promoción del desarrollo local se podrá romper el ciclo de pobreza y desnutrición que ha marcado la historia de La Guajira.

